

LAS FUERZAS SOCIALES Y EL DIALOGO

Segundo Montes

El estudio de las fuerzas sociales y de su comportamiento, en una sociedad concreta e histórica, es indispensable no sólo para un análisis coyuntural, sino también para entender el componente dinámico de la estructura social, al menos desde una perspectiva analítica. Ciertamente las fuerzas sociales mantienen una relación permanente, profunda y estrecha, con los componentes estructurales —las clases sociales, con todas las matizaciones necesarias en una realidad y formación social específicas—, y los márgenes de acción están circunscritos a los límites que éstos les imponen, dentro de los que actúan con cierto grado de autonomía.

El análisis coyuntural, más político que socio-económico, permite entender el comportamiento operativo de la estructura social, —las clases sociales— a través de las fuerzas sociales, —que de ellas se originan y son su expresión parcial— sus alianzas y recomposiciones, frente a problemas y crisis concretas. Por eso, mejor que estudiarlas en abstracto, o en su relación con el componente estructural, puede interesar el confrontar con un planteamiento concreto que de alguna manera les afecta; en este caso, el diálogo con el FMLN-FDR.

Frente a la crisis, conflicto y guerra civil en que naufraga El Salvador desde hace seis años, se pueden plantear diversas alternativas de solución. Por el momento se han ensayado tres de ellas, con mayor o menor profundidad, pero ninguna ha alcanzado los objetivos pretendidos en su proyección global a la sociedad como conjunto. La solución militar, a través de una victoria de una de las partes en el campo de batalla, no sólo no se ha logrado hasta el momento, sino que las perspectivas no auspician una solución previsible a corto plazo por esta vía, a pesar de manifestaciones optimistas transitorias por cualquiera de las dos partes; la realidad más bien parece mostrar un equilibrio fundamental en la lucha, acompañado de una destrucción creciente, sistemática y progresiva del país. La solución electoral tam-

poco ha logrado resolver el problema fundamental, si bien ha introducido un proceso ya consumado de retorno a la constitucionalidad y al ejercicio del poder político a través del voto directo; al no haber conseguido el reconocimiento y legitimación del sector insurgente, ni haber logrado imponer una hegemonía política en toda la sociedad, la crisis no se ha resuelto; por otro lado, la solución electoral nacida de un consenso de ambas partes contendientes, que legitimaría el resultado y que fuera aceptado como vía de solución duradera, no ha sido realizada o probada hasta ahora, y tendría que originarse en un compromiso político entre las partes, fruto de una negociación exitosa. La tercera solución, apenas ensayada, es la del diálogo-negociación entre las partes contendientes y representativas de ambos grupos de poder; se inició hace poco más de un año, tuvo una agónica segunda reunión poco después, y ha transcurrido casi un año entero sin que se tenga la tercera ni se logren avances mínimos, lo que aleja una perspectiva de solución a la vista por este camino.

Al hablar del diálogo, como catalizador del comportamiento de las diversas fuerzas sociales, no entendemos simplemente repetidas conversaciones en las que se planteen las diferencias y las incompatibilidades, se establezcan relaciones humanas y sociales entre personajes de la vida nacional, ni se fijen temas y fechas de reencuentro y discusión. Entendemos un diálogo encaminado a una negociación entre las partes, a fin de encontrar y aplicar una solución política a la crisis, hasta lograr un área suficientemente consistente y sólida para un consenso o para un pacto que abra el camino a una solución definitiva para la sociedad en su conjunto. Frente a este último concepto de diálogo vamos a centrar el análisis de las fuerzas sociales.

Que el diálogo, de hecho, no camina, es una realidad incontestable y objetiva. Si este proceso no prospera no puede ser atribuido a actitudes voluntaristas ni a intenciones subjetivas. Hay que tratar de averiguar las causas reales que impiden su avance. Sin excluir otras posibles, una línea de acercamiento puede ser el evaluar lo que cada una de las principales fuerzas sociales gana y pierde con el diálogo-negociación. Indudablemente el análisis es parcial, deja por fuera otros muchos elementos, e incluso pueda ser que excluya o le dé menos importancia de la debida a determinados elementos evaluativos, pero tal vez el intento analítico que presentamos pueda ayudar a entender un aspecto del proceso.

1. La Administración norteamericana

Aunque se trata de una variable externa, y no constituye una fuerza social salvadoreña, sin embargo no es posible dejarla fuera del análisis y de la evaluación, por el decisivo e innegable papel que juega en todo el proceso. Sin llegar a admitir el juicio de algunos que afirman que, de hecho, El Salvador se ha convertido en el 51º. Estado de la Unión, o en una especie de Estado Libre Asociado, aunque formal u oficialmente no se haya legalizado, no hay duda de que la administración norteamericana está ejerciendo un poder prioritario y decisorio en lo económico, militar, político y diplomático,

no menos que en la creación de una imagen internacional apropiada respecto a El Salvador y su gobierno.

En una solución negociada, por la que se encontrará unas bases comunes de consenso o de pacto, alejadas de las posturas extremas de ambos contendientes, tendría que lograrse una posición intermedia entre las que éstos sostienen; en otras palabras, más a la izquierda que el proyecto demócrata, y más a la derecha que el proyecto insurgente. La administración norteamericana repetidas veces ha manifestado expresamente que no permitirá un triunfo revolucionario en El Salvador, ni una participación en el poder, ni una economía, una institución armada y una posición internacional de "no alineamiento" respecto al sistema occidental. Juzgamos que esta postura no obedece, al menos en forma exclusiva ni decisiva, a la voluntad personal, a las características ideológicas del Presidente Reagan o de su partido, aunque esos aspectos pueden incidir de alguna manera en la forma de aplicación de su política. Obedece, más bien, a ciertas leyes a las que tiene que someterse una potencia hegemónica —a las leyes objetivas de un "imperio", dirían otros— para poder ser tal y para continuar siéndolo. No puede permitir que un país más, en su propio "traspatio", en su frontera estratégica, se le escape del control e influjo hegemónico, y menos en la región centroamericana, con el problema irresuelto de Nicaragua y la amenaza de un movimiento de liberación generalizable, dadas las condiciones sociales objetivas a las que están sometidas las grandes mayorías depauperadas y el surgimiento o consolidación de la toma de conciencia consecuente; al aceptarlo sería renunciar al papel de potencia hegemónica.

La administración norteamericana, por consiguiente, ganaría tranquilidad política, relativa, en la zona; disminución en el drenaje económico por la ayuda militar y económica —aunque la reconstrucción absorbería durante un largo período ayudas posiblemente mayores para no reincidir en las condiciones que originaron el conflicto—; mayor seguridad —o menores riesgos para su personal militar y civil estacionado en el país; la posibilidad de modificar su imagen internacional, propiciando una solución política que no esté basada en la fuerza o en el triunfo militar, así como el establecimiento de relaciones justas y respetuosas con un régimen distinto, surgido de un pacto y ratificado por unas elecciones verdaderamente democráticas. Pero las pérdidas serían desproporcionadamente superiores, y de ahí el empeño obstinado de solucionarlo por otro camino. Aparte de la subjetiva humillación —subsanaable con el paso del tiempo y con la capacidad casi ilimitada de esa potencia— de fracasar en una política que se ha constituido como en punto de honor, la solución negociada supondría salirse, cuando menos en parte, de la órbita de poder y hegemonía; el nuevo régimen se constituiría en "no alineado", desnivelando el poder en los organismos internacionales y en la zona; su economía se diversificaría para ser más autónoma, así como sus relaciones internacionales y su política exterior; se rompería la entente constituida actualmente por El Salvador, Honduras y Costa Rica —en menos grado por Guatemala—, desestabilizando el frágil equilibrio regional; se estrecharían vínculos con Nicaragua, rom-

piendo su aislamiento y, consiguientemente, robusteciendo su posición; se debilitaría el baluarte militar regional contra el comunismo.

Si a la luz de un voluntarismo ético ambos aspectos pueden parecer relativamente balanceados, y que las pérdidas son capitalizables por una gigantesca potencia que está sobre todo riesgo frente a un liliputiense, a la luz de una política pragmática todo parece indicar que la percepción es de unas pérdidas excesivamente costosas frente a una magra e insegura o arriesgada ganancia.

2. La Institución Armada.

La institución armada, ciertamente, es parte del aparato del estado, bajo el órgano ejecutivo a través del Ministerio de Defensa y Seguridad Pública, con funciones definidas en la Constitución Política. Si bien en los últimos años han apoyado el proceso de democratización, también se han pronunciado oficialmente respecto a las soluciones, concretamente en relación al diálogo, y han mostrado su anuencia si se garantizan determinadas cosas que consideran innegociables. En un periodo de guerra su papel se vuelve más protagónico, su profesión insustituible, su cuota de poder se incrementa, su autonomía relativa se robustece, lo que debilita el proceso de una situación histórica de medio siglo en que controló el poder político a una nueva de mayor profesionalización y apoliticidad.

En una solución negociada la institución armada ganaría el haber logrado la paz para el país, el profundizar su transición hacia la consecución de las funciones que se le han asignado constitucionalmente, el respeto y reconocimiento de una parte del pueblo que actualmente no se lo brinda por razones ideológicas o por haber sufrido las consecuencias de la guerra y de la crisis; pero, sobre todo, la seguridad para sus vidas constantemente sometidas a riesgo de sangre, muerte y mutilaciones por la guerra, así como la vigilancia y el esfuerzo constante y permanente, la inseguridad por doquier, la incógnita de su destino.

Sus pérdidas, por el contrario, consistirían en una disminución del protagonismo que actualmente desempeñan en función de la guerra; en un debilitamiento de la imagen que se ha creado de la institución con respecto al pueblo (heroísmo, sacrificio, etc.) al dejar de estar presente en todas partes y de ejercer esas funciones; en un decremento de la cuota de poder que conservan por la misma crisis y guerra; en la disminución numérica de la institución por no ser necesaria tal magnitud en tiempo de paz; en la reducción de prestaciones y compensaciones por las condiciones extraordinarias y riesgosas del servicio en tiempo de guerra. Pero el punto de mayor conflictividad estaría en la preservación de la integridad y exclusividad representativa de la institución armada para todo el país, o en compartir su función y representatividad, en forma dividida o en forma integrada, con el ejército y demás fuerzas armadas insurgentes.

Desde esta última perspectiva, es lógico que la institución armada interprete que con una negociación de tal envergadura esté amenazada su

misma existencia histórica y tradicional, lo que le inclina a sopesar que es mucho más lo que pierde que lo que ganaría. En repetidas ocasiones ha manifestado oficialmente que la institución armada no es negociable.

3. El capital privado.

Es posible que el capital privado salvadoreño se haya debilitado algo en el proceso, por causa de las reformas, por la nueva orientación política, por la crisis económica nacional y el deterioro del aparato productivo, por la guerra. Sin embargo, el capital privado todavía es una fuerza de primera magnitud en el acontecer nacional: en el ámbito político se ha rearticulado a través principalmente de ARENA y ha logrado una cuota de poder muy considerable, controlando instituciones y organismos importantes, modificando sustancialmente los límites máximos de propiedad de la tierra hasta el punto de que se ha desvirtuado la segunda fase de la reforma agraria —que no se ha aplicado—; en el ámbito social ha revitalizado las organizaciones gremiales de la empresa privada, tanto las globales como las sectoriales, reagrupando fuerzas y creando nuevas alianzas, para librar una lucha en defensa de sus intereses; en el ámbito económico, además de lo ya indicado, no cesa en su intento por recuperar el control de la exportación del café, obtiene márgenes de ganancia en diversos rubros que son sustanciosos, como se ha visto en el enfrentamiento con el gobierno a causa de los decretos 500, 501 y 502, logrando doblegar parcialmente el intento gubernamental de regulación de precios y utilidades.

El capital privado ganaría con una solución negociada cierta paz social, mayores facilidades para la producción, más fácil acceso a los créditos y a las divisas, un potencial incremento del mercado interno de consumo —si bien estaría limitado por la escasa capacidad adquisitiva de las mayorías empobrecidas.

Pero sus pérdidas serían incomparablemente superiores, al llegar a un acuerdo negociado por el que el sistema económico tendría que ser mucho más social que el actual; con una distribución más equitativa de las utilidades. La reforma agraria tendría que ser no sólo implementada, sino profundizada y modificada, e incluso así no estaría ya en capacidad de solucionar la problemática en el agro, por lo que habría que dar paso a una revolución agraria —sobre lo que no viene el caso extenderse aquí y ahora—; las exportaciones e importaciones tendrían que regirse por nuevas reglas y controles estatales; la industria y los servicios también serían sometidos a otros cánones, así como los bienes raíces, los capitales, los créditos bancarios, las divisas y todos los elementos integrantes de la economía nacional.

No es necesario especular sobre posturas del capital privado frente a un diálogo que implique negociación de esta índole. Repetidas veces los órganos representativos del capital, ya sean gremiales (empresas privadas), ya sean políticos, se han pronunciado contra un diálogo, y con mayor fuerza contra una negociación que lastime o traicione los intereses de la patria y los suyos propios. Si frente a los repetidos intentos de reforma agraria ha

cerrado filas, si frente a débiles intentos de control de precios se ha opuesto hasta doblegar al gobierno, al ir más allá de lo ya decidido, pero no del todo cumplido, mucho menos asimilado y aceptado, frente a un proyecto económico mucho más lesivo de sus intereses tiene que oponerse, al juzgar que las pérdidas son incomparablemente desproporcionadas a cambio de unas efímeras y cuestionadas ganancias.

4. El gobierno

Entendemos propiamente el Organó Ejecutivo, actual, con su conformación política concreta, liderado y ejercido por el PDC y presidido por Duarte. Que el gobierno tiene un poder, una cuota de poder, es innegable; no sólo porque se lo otorga la constitución política y las leyes, sino por el ejercicio de la administración pública y la realidad objetiva lo confirma. Su poder es limitado factualmente, y es difícil y polémico ubicarlo en una gama correcta. Lo analizado en las fuerzas anteriores muestran las limitaciones que le imponen en su ejercicio y en qué grado se tiene que someter a sus intereses, aunque en otros aspectos el gobierno tiene capacidad de más autonomía, imposición de condiciones e incluso dominación relativa sobre dichas fuerzas.

En una negociación para encontrar zonas comunes de entendimiento y pacto político con los insurgentes, el gobierno ganaría políticamente el haber logrado la paz al margen de la guerra; lograría la unificación de la sociedad salvadoreña, el acabar con la división, la polarización, la violencia, la destrucción; alcanzaría marcos de proyección para una situación socio-económico-política más justos para las mayorías; crearía las condiciones para que la sociedad civil se impusiera sobre la sociedad política, el gobierno fuera aceptado por la sociedad total y pudiera orientar una sola política válida para todos; ampliaría su base social con todo el pueblo que desea la paz.

Pero los costos principales se cristalizarían en una mayor oposición y radicalización de las fuerzas que están más a la derecha del PDC, un enfrentamiento con la institución armada que por ahora se niega a negociar su actual conformación, se vería obligado a ir mucho más allá de sus actuales planteamientos ideológicos y político-pragmáticos, y tal vez más allá de lo que le permite su propia ideología de partido; un costo, quizás psicológicamente inaceptable, sería repartir la magra cuota de poder alcanzada con tanta dificultad y tras largo esfuerzo, ya fuera compartiendo el poder con los insurgentes simultáneamente, ya fuera renunciando ambos para aceptar conjuntamente un gobierno provisional en espera de una decisión libre de la voluntad popular.

Si los dos primeros costos se encuentran en el ámbito objetivo de las fuerzas sociales con mayor poder para impedirlo, los dos últimos, no por anidar en el ámbito subjetivo e ideológico dejan de ejercer un fuerte influjo en las decisiones, para oponerse a una solución inviable, porque es percibida como un costo inaceptable, superior a las ventajas que se podrían al-

canzar para el pueblo, pero no para las fuerzas determinantes, si no es en forma muy secundaria o accidental. Por otro lado, los elementos subjetivos cobran mayor importancia en la medida en que se carezca de una poderosa fuerza social propia estructural, y la coyuntura, la grieta entre ambos bloques contendientes y las fuerzas externas le confieran al PDC una función y categoría como de "clase política gobernante" o de grupo de "empresarios políticos".

5. Los partidos políticos de oposición.

Los partidos políticos son fuerzas reales, no tanto en relación a los votos o a su representatividad en la Asamblea Legislativa, en la capacidad de expresión pública, sino sobre todo en cuanto a las bases sociales que están detrás de ellos y a las fuerzas económicas que los sustentan. De todos los partidos políticos legalizados, únicamente cuatro —aparte del PDC— tienen actualmente representación en la Asamblea, y el número de diputados guarda una correspondencia con la magnitud de sus bases o de las fuerzas que se expresan por ellos. Dada la conformación presente, con una mayoría absoluta del PDC, es irrelevante, como fuerza político-social, AD y PAISA, que cuentan con un diputado cada uno.

Por lo que se refiere a ARENA, no sólo se ha pronunciado repetida y oficialmente contra cualquier negociación en el sentido en que estamos hablando, sino que el análisis de las fuerzas fundamentales que lo sustentan —como se ha evidenciado en las sucesivas campañas electorales— se identifican con el capital privado —o con un sector determinante del mismo—, por lo que no se requiere tratarlo nuevamente.

Quedaría el PCN, como fuerza política todavía importante —aunque en presumible declive, a pesar de su renovación, o incluso por eso mismo—, que puede cobrar una relevancia superior a la que le corresponde por depender del voto de sus diputados el que se alcance una mayoría cualificada que pudiera ratificar el pacto negociado. En tal hipótesis, el PCN ganaría un éxito político —prácticamente inalcanzable por otra vía—, sobre todo si no se limita a apoyar y secundar la negociación, sino si se convirtiera en agente dinamizador de ella, mediador entre las fuerzas que anteriormente se han presentado, recuperaría una cuota del protagonismo político perdido y, sobre todo, no arriesgaría un poder que no tiene; frente a eso se le plantean costos políticos, ideológicos e históricos difíciles de asimilar: su aislamiento político se acrecentaría frente a la presión de las fuerzas que se oponen al diálogo-negociación y correría el peligro de ser relegado a un lugar intrascendente como consecuencia de la estructura política pactada en la negociación, su ideología —aunque renovada y progresistivizada— todavía está muy alejada de la que podría ser tolerada como consecuencia del acuerdo, su historia política es un lastre no sólo al interior del partido sino también frente a los insurgentes que nacieron precisamente al abrigo de sus administraciones y en reacción obligada a su política.

Parecería que todo lo anterior, por lo tanto, no es más que un ejercicio mental de elucubraciones hipotéticas, frente a una realidad concreta de un conjunto de partidos ubicados más a la derecha del PDC, algunos de los cuales podría articular alianzas tácticas sumamente riesgosas, aprovechando las grietas existentes, para recuperar su participación como "clase política gobernante" al margen de la magnitud de su base social. Todo parece indicar, más bien, que los costos superan las ventajas que los demás partidos podrían alcanzar con un tipo tal de organización.

6. Las organizaciones laborales legales.

En esta fuerza social se incluye a toda aquella parte del pueblo, de las mayorías trabajadoras, que están organizadas, bien sea en sindicatos, en cooperativas, en gremios de artesanos o empleados, o en agrupaciones similares. Ciertamente son una fuerza, muy numerosa, pero el poder que detentan es muy relativo y limitado; juegan un papel decisivo para llevar al poder a un candidato o a un partido, en épocas electorales, pues el sistema del voto se basa en la cantidad y en el número; sin embargo, tienen escaso o nulo poder para mantener a un gobierno o para derrocarlo, por carecer de brazo armado y de capital o poder económico desestabilizador, ya que una vez elegido, un gobierno no se somete a una consulta popular, a un plebiscito, para mantenerse o renunciar.

Tampoco tienen la capacidad de movilización suficiente como para desestabilizar profundamente, o para derrocar, o para modificar la política de un gobierno acosado por otras fuerzas sumamente poderosas, y menos en tiempo de guerra civil, después de los años que han pasado y las experiencias sufridas por el sector laboral organizado. Pero es más, la misma organización laboral está profundamente dividida, dicotomizada, incluso enfrentada en muchos aspectos; si la unión entre los sectores campesinos, obreros y empleados es muy débil y quebradiza, en cada uno de los sectores se multiplican las confederaciones, federaciones y unidades, los pactos, coberturas, líneas de financiamiento, fidelidades y las ideologías; las rupturas, escisiones, rivalidades, se multiplican. Las demás fuerzas sociales tienen interés en impedir no sólo el monolitismo sino incluso la unidad estratégica de las fuerzas laborales, y disponen de los medios para hacerlo, ya sea por la cooptación, la presión, el influjo ideológico, o la represión preventiva.

Las ventajas de una solución negociada son todas positivas para este sector, que es el que sufre las consecuencias de la guerra en toda su profundidad y tragedia, por la muerte, el desplazamiento, la inseguridad, la crisis económica, la pérdida de sus hijos en el campo de batalla, la carencia de empleo o de salarios de subsistencia. Pero su fuerza es muy débil, como ya se ha indicado. Son los que más se benefician los que más necesitan una solución urgente a la guerra y a la crisis, pero su capacidad de presionar, de inclinar a las demás fuerzas sociales hacia una negociación es muy reducida; las presiones al gobierno para que continúe el diálogo no han sido fructíferas.

7. La iglesia católica.

La iglesia católica, en El Salvador, indudablemente es una fuerza social poderosa, como se constata continuamente. Sin embargo, es una fuerza muy peculiar, distinta de las otras que están fundamentalmente ubicadas y polarizadas. Lo religioso —más concretamente lo católico, que es lo tradicional y predominante, con una estructura jerárquica representativa— penetra en los demás sectores y fuerzas sociales, es compartido de alguna manera por todas ellas. Todas las fuerzas sociales se profesan creyentes, cristianas, ortodoxas y auténticas, e incluso defensoras de las creencias y valores legítimos del catolicismo —aunque sostengan posiciones ideológico-políticas antagónicas—; todas ellas se esfuerzan por capitalizar, integrar —tal vez incluso manipular a veces— lo religioso a su favor. Por ello, lo religioso, si bien es una fuerza, lo es de una manera especial, e incluso la unidad básica se ve debilitada por las interpretaciones y las opciones políticas dispares, la división factual de los creyentes y de sus jerarcas, la simpatía, adecuación o traducción del mensaje y de la vivencia religiosa a proyectos históricos concretos.

Por otro lado, su fuerza se ubica en el ámbito de lo ético-idealista, del voluntarismo, sin posibilidad de acción fuera de la moral. De ahí que no pueda incidir más que a través del convencimiento, del sentimiento humanitario y religioso, de la presión moral o de la racionalidad. Por lo que su acción encaja más bien en la mediación, entre cristianos, convencidos todos de poseer la verdad y practicar la correcta moral; y cuando los intereses concretos se ven amenazados, la comunión cristiana se resquebraja o se debilita, las acciones se racionalizan, y las opciones se ideologizan, muchas veces a través del mismo mecanismo religioso.

Es conveniente no confundirse con el caso excepcional de Mons. Romero. El no era un líder carismático; sino más bien un hombre reservado; no era el hombre mediador, sino el propuesto por las fuerzas menos progresistas, que luego lo acusarían de traidor. Fue forjado por la misma crisis social, que lo convirtió en líder incuestionable al desatarse la crisis nacional y el vacío de dirigentes, ideologías y proyectos aglutinantes, en una sociedad dividida pero aún no del todo polarizada; el vacío creó la necesidad de un líder carismático, y lo llenó con un obispo, que supo ser consecuente y tomar el puesto que la sociedad le ofreciera, porque la religiosidad profunda de los salvadoreños propiciaba la credibilidad en un vocero de la iglesia. Pero aquellos tiempos han pasado. Los dos bloques se han reestructurado, aglutinado, consolidado; han conformado sus organizaciones, sus proyectos, sus ideologías, sus estructuras y sus dirigentes. La sociedad está dividida, polarizada, enfrentada en una guerra civil, pero no hay un vacío que llenar, ni un líder capaz de ser aceptado o escuchado por ambos bandos —al menos mientras no se profundice aún mucho más la crisis o se agudicen y generalicen las trágicas consecuencias de la guerra.

Ha pasado el tiempo de los líderes carismáticos, y ha llegado el de los políticos, las organizaciones consistentes, el de la guerra o el de la nego-

ciación. Hoy Mons. Romero no podría ser el mismo que fue en su arzobispado, porque las condiciones objetivas y sociales han cambiado; tampoco podría ser tolerado si se empeñara en jugar el papel que tan brillante y heroicamente cumplió.

8. Las masas

Es preciso suprimir cualquier connotación negativa del término masa. No es una actitud de desprecio, es simplemente una categoría analítica, que se diferencia de la del "pueblo" —utilizado abusiva e impropriamente con demasiada frecuencia—. Entenderemos, por lo tanto, toda aquella parte de la población, especialmente de las mayorías pobres y medias, que no está organizada ni dispone de mecanismos de expresión y defensa propia de sus intereses. Por ello mismo, no es una verdadera fuerza social, por no estar estructurada ni organizada. Es una multitud de compra en el mercado y de votos en las urnas; pero, aparte de eso, no tiene ninguna otra injerencia en la vida socio-política.

Las ventajas y los costos de esta población, en caso de una negociación, se equipararían a los de las organizaciones laborales, pues ella es la que está padeciendo las consecuencias peores de la crisis y de la guerra, con el agravante de que por no estar organizadas no pueden ejercer presión alguna por contrarrestar el deterioro creciente de sus posibilidades económicas, ni pueden incidir en cambios socio-políticos que les benefician; simplemente estar a la expectativa de lo que se les otorgue. Por más que sean la mayoría, supuestamente, su poder como fuerza social es prácticamente inexistente; son sujetos pasivos del proceso, aunque pudieran constituirse en un fuerte núcleo de concientización y movilización social a medida que se agudicen las condiciones de supervivencia, o si existiesen dirigentes que supieran proponerles proyectos consistentes.

Los insurgentes y sus bases (FMLN y FDR)

Que ambos frentes son una fuerza es de todo punto incuestionable, dado que llevan casi cinco años de guerra declarada, enfrentándose a una fuerza político-económico-militar que no ha sido capaz de derrotarlos ni de debilitarlos sustancialmente. Tienen fuerza militar suficiente como para ser una amenaza permanente para la institución armada; tienen fuerza económica suficiente como para soportar la supervivencia y la guerra; tienen fuerza política suficiente como para desestabilizar al gobierno y para recibir apoyos y concertar alianzas internacionales; tienen fuerza social y bases suficientes como para no quedar aislados en un territorio los combatientes, como para suplir las bajas e incrementar el número de los armados, como para movilizar masas simpatizantes u organizaciones favorables.

Es una evaluación de costo-beneficio para los insurgentes hay que aplicar los mismos criterios objetivos que para las demás fuerzas sociales; ante una solución negociada. Los insurgentes ganarían poder;

conquistarían para sí y para las mayorías ventajas económicas, sociales y políticas que por otro medio, incluida la guerra, no parece ser que las fuerzas opuestas vayan a permitir que las obtengan; lograrían lo que históricamente pudiera ser lo máximo alcanzable en tal realidad objetiva, que supondría conquistas para los pobres de una dignidad y unos mínimos materiales que nunca han tenido; supondría el fin de la guerra con todas sus secuelas para el país y para sus bases, sin menospreciar la seguridad y tranquilidad para sus vidas —combatientes, dirigentes y bases— en una sociedad que no sea la de la montaña y la clandestinidad permanentemente amenazada.

Frente a esto, los costos significarían renunciar a un triunfo militar, a un control hegemónico de la sociedad, a un proyecto revolucionario, a unas estructuras totalmente nuevas y distintas; significaría la percepción introyectada de un fracaso, de la imposibilidad de una total liberación revolucionaria, de un costo demasiado alto —en vidas, sangre, mutilaciones, sacrificios, años de vida errante y de austeridad espartana— para tan magras ganancias; significaría un retroceso ideológico, un paso atrás en el intento por concretizar históricamente un destino mundial revolucionario; significaría una desconfianza y abandono de parte de las bases sociales frustradas en su lucha y heroísmo, en la confianza depositada en un proyecto y en unos dirigentes que no han logrado la utopía anhelada.

Si bien para las mayorías pobres y para los dirigentes en estas fuerzas insurgentes la solución a través de la negociación sería una victoria real, una conquista —tal vez la única viable—, pues el correrse hacia el centro es posible en relación al pasado y presente —no así para las fuerzas oponentes, para las que toda concesión y corrimiento hacia el centro sería una derrota y una pérdida—; sin embargo, todo parece indicar que para las fuerzas insurgentes —así como para sus oponentes— el balance lo perciben como desfavorable, como un retroceso ideológico inaceptable para algunos de ellos cuando menos, y ambas privilegian la solución militar sobre la negociada, sin que por ello el diálogo se convirtiera en un simple recurso táctico.

Un elemento adicional limitante.

Aparte de la evaluación, más o menos objetiva, que ambas partes realicen respecto a las ventajas e inconvenientes, a las ganancias y costos de una solución negociada, hay un elemento subjetivo que incide en las opciones concretas que se tomen, o en la urgencia de aplicarlas, y es la percepción que tienen del proceso. No por ser subjetivo deja de ser real. La realidad es polarizada por la percepción subjetiva. Lo objetivo se percibe y se subjetiviza, y es indiferente si esta percepción es o no distorsionada; es la percibida realmente, y es la que condiciona la respuesta.

Ambas fuerzas contendientes y sustentantes tienen el convencimiento —repetidas veces declarado— de que están ganando la guerra, o de que la van a ganar en un plazo relativamente corto y previsible. Frente a esta percepción de la realidad, la solución armada, militarista, se impone, y el diálo-

go o la negociación pasa a un lugar secundario, "táctico", "político" —en el sentido peyorativo del término—. El postergar una negociación significará presentarse a la mesa de discusiones con más y mejores cartas que jugar, más ventajas con las que pactar. Solamente cuando la realidad objetiva, o la percepción subjetiva, sea de que la guerra está definitivamente inclinada hacia un lado, la negociación puede urgir a los perdedores para salvar lo más posible frente a una inminente derrota, o puede inclinar el sentimiento humanitario y noble de los ganadores o brindar una honrosa y digna salida para sus contrarios.

La realidad objetiva, el análisis del proceso —al menos en nuestra percepción subjetivizada— es de que la guerra está equilibrada y estacada. En El Salvador no hay ningún ganador: ni el FMLN está ganando la guerra ni se prevé que la pueda ganar en un tiempo razonable, ni tampoco la institución armada está ganando la guerra o se prevé que pueda derrotar al FMLN en un tiempo razonable. Pero en El Salvador si hay un perdedor; el pueblo más pobre que está sufriendo una vez más las consecuencias de las estructuras, de las crisis, de la guerra, con sus vidas —en ambos bandos los que mayormente pelean y mueren son los pobres—, con su sangre, con su pobreza, con su temor, con su huida permanente, con su hambre; y el país que está siendo destruido sistemáticamente por la guerra, por las acciones de ambos bandos, por el deterioro de la ecología; la erosión acelerada por la destrucción de la vegetación y por las explosiones.

Sin embargo, si a las fuerzas contendientes y sustentantes la percepción de la realidad es distinta —y convendría investigar en cuál de ellas es más importante la subjetividad—, o si estos efectos y consecuencias no son suficientemente motivantes como para encontrar otra solución distinta a la guerra, las opciones que se tomen serán otras de las exigidas por la realidad, si es la que se ha presentado. Aparte de eso, pudiera ser que para algunas de esas fuerzas la lucha sea el mecanismo de defensa de su identidad.

Perspectivas.

Aunque no sea propiamente una conclusión de lo anterior, el análisis ofrecido parece pronosticar unas perspectivas de continuación y profundización de la guerra civil en El Salvador con todas sus consecuencias trágicas y fatales, en muchos aspectos irreversibles. Tendría que intervenir una variable nueva, suficientemente decisoria, como para que el rumbo del proceso cambie significativamente. Y no se puede aducir las negociaciones en torno al secuestro de la hija del Presidente Duarte y de los alcaldes, que es un caso puntual y ha despertado reacciones muy diversas; el futuro indicará si se ha abierto alguna puerta hacia el diálogo, o más bien se ha cerrado.

Las fuerzas que tienen más poder y capacidad de modificar el curso del proceso no parecen dispuestas a encontrar una solución negociada. Las fuerzas y las masas que se beneficiarán cualitativamente de una solución negociada carecen del poder suficiente para impulsarla.

Sin querer incurrir en un voluntarismo idealista —contrario a toda la línea de análisis sustentada en el artículo— es difícil resignarse a aceptar una continuación y profundización de la guerra, o resistirse a proyectar una esperanza. Las fuerzas sociales más débiles, y las masas, tal vez podrían lograr su destino histórico llevando a la práctica el sentido más profundo de la democracia: que las mayorías decidan el destino de los pueblos e impongan, sobre los de las minorías poderosas, los intereses generales. Tendrían que organizarse en una lucha por la paz, crear una conciencia nacional de racionalidad, de humanismo, de entendimiento, de renuncia parcial por el bien de la totalidad. Tendrían que movilizarse y movilizar a la sociedad, a la conciencia colectiva, para lograr una solución a la agonía y la tragedia. Pero haría falta unos dirigentes clarividentes y comprometidos de verdad con los intereses nacionales y de las grandes mayorías. Posiblemente sea idealismo, utopía; pero sería la alternativa que habría que intentar, dejando a la historia su juicio, su criterio de verificación y de posibilidad.

San Salvador, 19 de octubre de 1985.